

Título: Inseguridad Nacional

Fuente: Reforma

Fecha: 10/04/1994

Folio: 2793

Medida: 14456

### Inseguridad Nacional

La sublevación de los zapatistas, que hoy confiere una nueva significación al aniversario del crimen de Chinameca, es una de las señales del desmantelamiento de los sistemas de seguridad nacional, que pone en riesgo la soberanía. Plaza Pública

Miguel Angel Granados Chapa Al presentarse de nuevo en Chiapas, el comisionado para la paz en esa entidad, Manuel Camacho Solís, desmintió que aceptará una embajada (se había hablado de la de España), con lo que tal vez inquietará una vez más a los jefes del Partido Revolucionario Institucional. Jinete en el As de oros, que su nuevo amigo Jesús M. Guajardo, coronel carrancista, le había regalado recientemente, Emiliano Zapata entró en la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919, hace setenta y cinco años. En vez de ser bienvenido por Guajardo, que lo convidó a comer allí, para pactar su propia defección pero que en realidad le tendió una trampa, una cerrada y certera descarga de fusilería lo recibió y en breves instantes terminó con su vida. La escena de Zapata traicionado y muerto ha sido narrada miles de veces, muchas de ellas en reiterativos discursos de circunstancias, desde que el sector revolucionario que lo asesinó, en un acto de hipocresía o de contrición terminó aceptándolo en su iconografía.

Pero el aniversario de Zapata cobra hoy nuevos significados, porque un ejército que invoca su nombre y lo ostenta en su propia denominación, está levantado en armas en una región selvática del sureste mexicano, muy lejos de donde Zapata encabezó su revolución campesina.

Por eso el recuerdo de Zapata, 75 años después, es política y no historia. Por eso, una marcha y un mitin multitudinario en el centro mismo del país (el Zócalo de la ciudad de México) reflejarán el vivo y reavivado rechazo de una vasta porción de los pobladores rurales a la política agraria y agrícola de este gobierno al que le faltan aún 234 días para terminar. Se evidenciara así, adicionalmente, la simulación que hizo creer que las reformas al artículo 27 constitucional, y las nuevas leyes agraria, forestal y de aguas contaron con el asentimiento de los afectados. Hubiera bastado para saberlo comprobar la lentitud con que esas modificaciones han entrado en operación (en las áreas y lugares donde eso ha ocurrido) y la necesidad gubernamental de disfrazar la entrega caritativa, asistencial, de dinero en efectivo con ropajes de pretendido impulso a la productividad, para saber que la planeación desde el escritorio, siempre destinada al fracaso, se frustra rotundamente cuando concierne al campo. Y es que el campo no es sólo lugar de producción, sino también entorno vital y complejo, más susceptible de ser comprendido por la antropología que con el simple análisis econométrico.

El eje en la marcha y concentración agraria de esta mañana es el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC) de Chiapas. Constituido hace apenas tres meses, comenzó por alterar la intención manipuladora con que fue creado, y ahora es el motor de ocupaciones de tierras en esa entidad, del reanudado reparto agrario (en el último mes el gobierno estatal ha entregado diez mil

hectáreas, de las que ya no había), y de la movilización que se propone anular las enmiendas legales de esta administración en materia rural. Veinte años después de que el gobernador Manuel Velasco Suárez convocó al primer congreso indígena de Chiapas, en San Cristóbal (al que acudió el obispo Samuel Ruiz), y al calor de la rebelión zapatista se organizó el segundo congreso, de donde surgió el CEOIC. La Secretaría de Desarrollo Social financió la instalación y los primeros pasos del funcionamiento del Consejo, en la esperanza de que pudieran manejarlo sus organizaciones afines, como la Unión de Uniones, que ya en las primeras horas del levantamiento armado había manifestado su credo antizapatista. Pero no fue así. De nuevo el diagnóstico estaba equivocado, y los patrocinadores de un CEOIC que requería como caja de resonancia simplemente, no se percataron de la hondura de los rezagos ni de la intuición con que las comunidades y los grupos más golpeados por los gobiernos anteriores y por la política general reaccionaron ante la coyuntura. No obstante que por ley funciona un consejo indígena, organizado hace años con fines de manipulación y del que forman parte los 13 alcaldes de los municipios acusadamente indios de Chiapas, el nuevo Consejo es el verdadero interlocutor de las autoridades, y la única fuerza capaz de contribuir a los afanes por la paz. Estos se reanudaron formalmente el viernes, aunque un inesperado preámbulo lo anticipó el jueves anterior. Al atardecer del 7 de abril, el obispo Samuel Ruiz fue recibido calurosamente por una multitud en la Ciudad Universitaria de la capital mexicana. Era un homenaje preparado con anterioridad, pero se convirtió en un acto de desagravio ante la ruin campaña contra prelado, atizada en los días recientes por el Movimiento de Solidaridad Iberoamericano, uno de los organismos de fachada del Partido Laboral, turbia agrupación financiada con fondos norteamericanos, en algún momento de la propia CIA. Este movimiento imprimió miles de carteles donde una distorsionada foto de don Samuel aparece bajo el letrero Se busc, y se tilda de traidor al obispo. Ya antes, ese Movimiento (a cuyas vinculaciones con el Partido Laboral, y con la candidata presidencial Cecilia Soto nos referiremos el martes próximo) había lanzado, aunque con menor difusión, un embate contra Manuel Camacho, demandando su destitución como comisionado para la paz. Ambas acciones revelan que el esfuerzo pacificador está en la mira de los peores intereses. Por eso el obispo está protegido por un dispositivo de seguridad, y por eso hoy mismo podrían ocurrir actos de provocación, que si son atribuidos al zapatismo, con la peregrina explicación de que un movimiento armado no podía dejar sin marca espectacular la fecha luctuosa del líder histórico al que se acogen, obstruiría la reanudación del diálogo. Esta fue solicitada a Camacho por el gobernador Javier López Moreno, quien convocó a una reunión en Tuxtla Gutiérrez para informar al Comisionado sobre la tarea que a su gobierno corresponde, respecto de los compromisos presentados por Camacho al Ejército Zapatista, y que éste consultaba en sus comunidades cuando varias señales inquietantes y aún ominosas lo hicieron suspenderla. Un completo cuadro de reformas legales, que conciernen al campo, la justicia y la democracia, está siendo afinado para que el Congreso local lo revise y apruebe.

Entre los oradores que contó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marcos Nazar, que ejerce el cargo desde enero. Fue un competente miembro de la judicatura federal, que había llegado a ser magistrado de circuito y tenía delante de sí un sitial de ministro de la Suprema Corte de Justicia. Nazar canceló esa posibilidad, al cortar su carrera y volver a Chiapas, convocado por el gobernador López Moreno, Nazar había salido, siendo juez de distrito en Tuxtla Gutiérrez, luego de que entró en conflicto con el gobernador J. Patrocinio González Blanco, cuya arbitrariedad era a menudo combatida por los afectados mediante el juicio de amparo. Las sentencias de Nazar, apegadas a derecho, irritaban al gobernador, cuya actuación contribuyó en gran medida al estallido armado del primero de enero y al abordamiento inicial, concluido hoy hace exactamente tres meses.

Camacho, que en ese lapso ganó una dimensión política de gran alcance, que rehusó ser candidato a la Presidencia de la República y cuya renuencia a apoyar a Luis Donaldo Colosio le generó el súbito achicamiento de su espacio político, tras el homicidio del candidato priísta, formuló en ese acto nuevos

llamados al entendimiento. Pero al desmentir que aceptará una embajada (se dijo que sería la de España, dejada al descubierto por las necesidades presidenciales), acaso provoque de nuevo desazones entre los priístas, que lo acusaron de entorpecer con sus indefiniciones la campaña de Colosio, y hasta quisieron cobrarle de mala manera sus reticencias, con abucheos organizados en su contra en el sepelio de su antiguo subordinado, después colega y al final contendiente y vencedor.

Esa campaña de Colosio, interrumpida abruptamente el 23 de marzo, fue reanudada por Ernesto Zedillo quince días después, en el mismo lugar donde quedó en suspenso, en las Lomas Taurinas de Tijuana. Esta vez no estaba allí Jorge Antonio Sánchez Ortega, ahora suspendido miembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que sí acudió al mitin donde Colosio fue asesinado, y fue detenido brevemente por la policía municipal, dos de cuyos agentes lo vieron salir del lugar de los hechos, con la camisa ensangrentada y lo capturaron. Sánchez Ortega se identificó como miembro de esa oficina, que en 1985 resultó de fundir la tenebrosa Dirección Federal de Seguridad y la ineficaz Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, y fue dejado en libertad, no obstante que la prueba para saber si había disparado resultó "parcialmente" cierta.

Vamos a suponer que Sánchez Ortega actuó como dice y que es ajeno al homicidio.

Supongámoslo así no sea sino por no alimentar la natural y comprensible, pero socialmente dañina fiebre indagadora que a todo el mundo se nos ha despertado, y que nos conduce a encontrar indicios y evidencias que contradicen las versiones oficiales sobre el homicidio. Estas resultan de un momento procesal que apenas es el inicio de lo que formalmente es la búsqueda de la verdad. Aún Mario Aburto Martínez, que ante muchos testigos disparó contra Colosio, sólo es un presunto homicida, pues justamente el proceso se instaura para probar que es el autor de un delito y para fijarle una sentencia por tal motivo. El proceso de tres de sus presuntos cómplices apenas se habrá iniciado en las horas previas a esta en que usted lee este diario, si el juez federal les dictó la formal prisión dentro del término legal que concluía a las cinco de la mañana de hoy. Supongamos, pues, que Sánchez Ortega no tiene relación con el caso. Sin embargo, si la tiene con el deplorable estado en que se halla la salvaguarda de nuestra seguridad nacional.

Conforme a la información oficial, Sánchez Ortega es un novato. Apenas ingresó al CISN el primero de octubre pasado. Y no obstante su presumible inexperiencia, se le destina a Tijuana, que es un importante paso fronterizo, un cruce de inmigración indocumentada mexicana y centroamericana, un cuartel principalísimo de narcotraficantes protegidos por bandas armadas, y con tensiones políticas peculiares, derivadas del hecho de que el estado y el municipio están gobernados por el PAN, y el PRI ha caído en la desorganización. Por si eso fuera poco, se encomienda a Sánchez Ortega una misión delicada, la de ocuparse, por lo menos para informar sobre ella de la visita del candidato presidencial del PRI, personaje tan relevante para la estructura gubernamental que su escolta está mandada por el subjefe del Estado Mayor Presidencial (con licencia).

¿No cabe advertir en la desproporción entre la experiencia de un recién llegado y la naturaleza de plaza y las funciones que se le asignan, por lo menos una grave negligencia? Me parece que la respuesta tiene que ser afirmativa. Y es, además, simbólica de lo que ocurre en el ámbito de la seguridad nacional. El Centro correspondiente fue dirigido por dos personajes cercanos al Presidente Salinas, el señor Fernando del Villar y el señor

José Córdoba, pues aquél reportaba a éste y no al secretario de Gobernación. Ambos siguieron teniendo esa responsabilidad durante el año pasado, aunque Del Villar hubiera dejado otro director en su sitio. Hoy ninguno de los dos está en los cargos desde donde desmantelaron un servicio que, aunque sea repulsivo en su esencia, alguien debe cumplir y cumplir con exactitud, eficacia y prudencia. Como resultado de ese desmantelamiento se han creado verdaderas condiciones de inseguridad nacional, cuyas manifestaciones más obvias son el crecimiento del poder armado del narcotráfico (y por lo tanto el homicidio del cardenal Posadas Ocampo), la sublevación de Chiapas y el asesinato de Colosio, pero

que se componen de las vivencias cotidianas de muchos ciudadanos, afectados en sus vidas y sus intereses por poderes acerca de los cuales el CISN tiene el deber de informar. A cambio de esa riesgosa ineficacia, que puede poner en peligro la soberanía nacional misma, el aparato gubernamental de protección está estrenando una vistosa presencia, evidenciada alrededor de varios candidatos presidenciales, a despecho suyo en algunos casos. El problema de la seguridad no es asunto de guardaespaldas, que hasta pueden empeorar con su acción las circunstancias de un atentado, sino de información puntualmente conseguida y comprobada. Cercar a los protagonistas de la campaña presidencial no es el mejor modo de resguardarlos, al menos si la operación se realiza con miembros o antiguos integrantes de corporaciones que padecen justificada mala fama. A pesar de tal cerco, las giras de los candidatos de la oposición prosperan. En ámbitos sociológicamente diversos a sus enclaves naturales, como emisiones priístas de televisión, la Unión Social de Empresarios Mexicanos y la Universidad de las Américas, Cuauhtémoc Cárdenas se desplaza con la claridad -y el éxito- que sólo sus tozudos enemigos se empecinan en negar. Y puesto que en otro ambiente estudiantil, el ITAM, Diego Fernández de Cevallos alcanza altas cuotas de aceptación, tal vez debamos esperar del voto joven la definición de un nuevo rumbo

#### Inseguridad Nacional

La sublevación de los zapatistas, que hoy confiere una nueva significación al aniversario del crimen de Chinameca, es una de las señales del desmantelamiento de los sistemas de seguridad nacional, que pone en riesgo la soberanía.

#### Plaza Pública Miguel Ángel Granados Chapa

Al presentarse de nuevo en Chiapas, el comisionado para la paz en esa entidad, Manuel Camacho Solís, desmintió que aceptará una embajada (se había hablado de la de España), con lo que tal vez inquietará una vez más a los jefes del Partido Revolucionario Institucional

Descriptores: Columna Plaza Pública/Inseguridad nacional Columna Miguel A. granados chapa  
Columna

Título: Plaza Pública/Semana Santa de 1954

Fuente: Reforma

Fecha: 01/04/1994

Folio: 2000

Medida: 6051

PLAZA PÚBLICA  
MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

# Inseguridad Nacional

La sublevación de los zapatistas, que hoy confiere una nueva significación al aniversario del crimen de Chinameca, es una de las señales del desmantelamiento de los sistemas de seguridad nacional, que pone en riesgo la soberanía.

Jinete en el *As de oros*, que su nuevo amigo Jesús M. Guajardo, coronel carrancista, le había regalado recientemente, Emiliano Zapata entró en la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919, hace setenta y cinco años. En vez de ser bienvenido por Guajardo, que lo convidó a comer allí, para pactar su propia defección pero que en realidad le tendió una trampa, una cerrada y certera descarga de fusilería lo recibió y en breves instantes terminó con su vida.

La escena de Zapata traicionado y muerto ha sido narrada miles de veces, muchas de ellas en reiterativos discursos de circunstancias, desde que el sector revolucionario que lo asesinó, en un acto de hipocresía o de contrición terminó aceptándolo en su iconografía. Pero el aniversario de Zapata cobra hoy nuevos significados, porque un ejército que invoca su nombre y lo ostenta en su propia denominación, está levantado en armas en una región selvática del sureste mexicano, muy lejos de donde Zapata encabezó su revolución campesina.

Por eso el recuerdo de Zapata, 75 años después, es política y no historia. Por eso, una marcha y un mitin multitudinario en el centro mismo del país (el Zócalo de la ciudad de México) reflejarán el vivo y reavivado rechazo de una vasta porción de los pobladores rurales a la política agraria y agrícola de este gobierno al que le faltan aún 234 días para terminar. Se evidenciará así, adicionalmente, la simulación que hizo creer que las reformas al artículo 27 constitucional, y las nuevas leyes agraria, forestal y de aguas contaron con el asentimiento de los afectados. Hubiera bastado para saberlo comprobar la lentitud con que esas modificaciones han entrado en operación (en las áreas y lugares donde eso ha ocurrido) y la necesidad gubernamental de disfrazar la entrega caritativa, asistencial, de dinero en efectivo con ropajes de pretendido impulso a la productividad, para saber que la planeación desde el escritorio, siempre destinada al fracaso, se frustra rotundamente cuando concierne al campo. Y es que el campo no es sólo lugar de producción, sino también entorno vital y complejo, más susceptible de ser comprendido por la antropología que con el simple análisis econométrico.

El eje en la marcha y concentración agraria de esta mañana es el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC) de Chiapas. Constituido hace apenas tres meses, comenzó por alterar la intención manipuladora con que fue creado, y ahora es el motor de ocupaciones de tierras en esa entidad, del reanudado reparto agrario (en el último mes el gobierno estatal ha entregado diez mil hectáreas, de las que ya no había), y de la movilización que se propone anular las enmiendas legales de esta administración en materia rural. Veinte años después de que el gobernador Manuel Velasco Suárez convocó al primer congreso indígena de Chiapas, en San Cristóbal (al que acudió el obispo Samuel Ruiz), y al calor de la rebelión zapatista se organizó el segundo congreso, de donde surgió el CEOIC. La Secretaría de Desarrollo Social financió la instalación y los primeros pasos del funcionamiento del Consejo, en la esperanza de que pudieran manejarlo sus organizaciones afines, como la Unión de Uniones, que ya en las primeras horas del levantamiento armado había manifestado su credo antizapatista. Pero no fue así. De nuevo el diagnóstico estaba equivocado, y los patrocinadores de un CEOIC que requería como caja de resonancia simplemente, no se percataron de la hondura de los rezagos ni de la intuición con que las comunidades y los grupos más golpeados por los gobiernos anteriores y por la política general reaccionaron ante la coyuntura. No obstante que por ley funciona un consejo indígena, organizado hace años con fines de manipulación y del que forman parte los 13 alcaldes de los municipios acusadamente indios de Chiapas, el nuevo Consejo es el verdadero interlocutor de las autoridades, y la única fuerza capaz de contribuir a los afanes por la paz.

Estos se reanudaron formalmente el viernes, aunque un inesperado preámbulo lo anticipó el jueves anterior. Al atardecer del 7 de abril, el obispo Samuel Ruiz fue recibido calurosamente por una multitud en la Ciudad Universitaria de la ca-

pital mexicana. Era un homenaje preparado con anterioridad, pero se convirtió en un acto de desagravio ante la ruin campaña contra prelado, atizada en los días recientes por el Movimiento de Solidaridad Iberoamericano, uno de los organismos de fachada del Partido Laboral, turbia agrupación financiada con fondos norteamericanos, en algún momento de la propia CIA.

Este movimiento imprimió miles de carteles donde una distorsionada foto de don Samuel aparece bajo el letrero *Se busca*, y se tilda de traidor al obispo. Ya antes, ese Movimiento (a cuyas vinculaciones con el Partido Laboral, y con la candidata presidencial Cecilia Soto nos referiremos el martes próximo) había lanzado, aunque con menor difusión, un embate contra Manuel Camacho, demandando su destitución como comisionado para la paz. Ambas acciones revelan que el esfuerzo pacificador está en la mira de los peores intereses. Por eso el obispo está protegido por un dispositivo de seguridad, y por eso hoy mismo podrían ocurrir actos de provocación, que si son atribuidos al zapatismo, con la peregrina explicación de que un movimiento armado no podía dejar sin marca espectacular la fecha luctuosa del líder histórico al que se acogen, obstruiría la reanudación del diálogo.

Esta fue solicitada a Camacho por el gobernador Javier López Moreno, quien convocó a una reunión en Tuxtla Gutiérrez para informar al Comisionado sobre la tarea que a su gobierno corresponde, respecto de los compromisos presentados por Camacho al Ejército Zapatista, y que éste consultaba en sus comunidades cuando varias señales inquietantes y aún ominosas lo hicieron suspenderla. Un completo cuadro de reformas legales, que conciernen al campo, la justicia y la democracia, está siendo afinado para que el Congreso local lo revise y apruebe.

Entre los oradores que contó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marcos Nazar, que ejerce el cargo desde enero. Fue un competente miembro de la judicatura federal, que había llegado a ser magistrado de circuito y tenía delante de sí un sitio de ministro de la Suprema Corte de Justicia. Nazar canceló esa posibilidad, al cortar su carrera y volver a Chiapas, convocado por el gobernador López Moreno, Nazar había salido, siendo juez de distrito en Tuxtla Gutiérrez, luego de que entró en conflicto con el gobernador J. Patrocinio González Blanco, cuya arbitrariedad era a menudo combatida por los afectados mediante el juicio de amparo. Las sentencias de Nazar, apegadas a derecho, irritaban al gobernador, cuya actuación contribuyó en gran medida al estallido armado del primero de enero y al abordamiento inicial, concluido hoy hace exactamente tres meses.

Camacho, que en ese lapso ganó una dimensión política de gran alcance, que rehusó ser candidato a la Presidencia de la República y cuya renuencia a apoyar a Luis Donaldo Colosio le generó el súbito achicamiento de su espacio político, tras el homicidio del candidato priísta, formuló en ese acto nuevos llamados al entendimiento. Pero al desmentir que aceptará una embajada (se dijo que sería la de España, dejada al descubierto por las necesidades presidenciales), acaso provoque de nuevo desazones entre los priístas, que lo acusaron de entorpecer con sus indefiniciones la campaña de Colosio, y hasta quisieron cobrarle de mala manera sus reticencias, con abucheos organizados en su contra en el sepelio de su antiguo subordinado, después colega y al final contendiente y vencedor.

Esa campaña de Colosio, interrumpida abruptamente el 23 de marzo, fue reanudada por Ernesto Zedillo quince días después, en el mismo lugar donde quedó en suspenso, en las Lomas Taurinas de Tijuana. Esta vez no estaba allí Jorge Antonio Sánchez Ortega, ahora suspendido miembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que sí acudió al mitin donde Colosio fue asesinado, y fue detenido brevemente por la policía municipal, dos de cuyos agentes lo vieron salir del lugar de los hechos, con la camisa ensangrentada y lo capturaron. Sánchez Ortega se identificó como miembro de esa oficina, que en 1985 resultó de fundir la tenebrosa Dirección Federal de Seguridad y la ine-

ficaz Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, y fue dejado en libertad, no obstante que la prueba para saber si había disparado resultó "parcialmente" cierta.

Vamos a suponer que Sánchez Ortega actuó como dice y que es ajeno al homicidio. Supongámoslo así no sea sino por no alimentar la natural y comprensible, pero socialmente dañina fiebre indagadora que a todo el mundo se nos ha despertado, y que nos conduce a encontrar indicios y evidencias que contradicen las versiones oficiales sobre el homicidio. Estas resultan de un momento procesal que apenas es el inicio de lo que formalmente es la búsqueda de la verdad. Aún Mario Aburto Martínez, que ante muchos testigos disparó contra Colosio, sólo es un presunto homicida, pues justamente el proceso se instaura para probar que es el autor de un delito y para fijarle una sentencia por tal motivo. El proceso de tres de sus presuntos cómplices apenas se habrá iniciado en las horas previas a esta en que usted lee este diario, si el juez federal les dictó la formal prisión dentro del término legal que concluía a las cinco de la mañana de hoy. Supongamos, pues, que Sánchez Ortega no tiene relación con el caso. Sin embargo, si la tiene con el deplorable estado en que se halla la salvaguarda de nuestra seguridad nacional.

Conforme a la información oficial, Sánchez Ortega es un novato. Apenas ingresó al CISN el primero de octubre pasado. Y no obstante su presumible inexperiencia, se le destina a Tijuana, que es un importante paso fronterizo, un cruce de inmigración indocumentada mexicana y centroamericana, un cuartel principalísimo de narcotraficantes protegidos por bandas armadas, y con tensiones políticas peculiares, derivadas del hecho de que el estado y el municipio están gobernados por el PAN, y el PRI ha caído en la desorganización. Por si eso fuera poco, se encomienda a Sánchez Ortega una misión delicada, la de ocuparse, por lo menos para informar sobre ella de la visita del candidato presidencial del PRI, personaje tan relevante para la estructura gubernamental que su escolta está mandada por el jefe del Estado Mayor Presidencial (con licencia).

¿No cabe advertir en la desproporción entre la experiencia de un recién llegado y la naturaleza de plaza y las funciones que se le asignan, por lo menos una grave negligencia? Me parece que la respuesta tiene que ser afirmativa. Y es, además simbólica de lo que ocurre en el ámbito de la seguridad nacional. El Centro correspondiente fue dirigido por dos personajes cercanos al Presidente Salinas, el señor Fernando del Villar y el señor José Córdoba, pues aquél reportaba a éste y no al secretario de Gobernación. Ambos siguieron teniendo esa responsabilidad durante el año pasado, aunque Del Villar hubiera dejado otro director en su sitio. Hoy ninguno de los dos está en los cargos desde donde desmantelaron un servicio que, aunque sea repulsivo en su esencia, alguien debe cumplir y cumplir con exactitud, eficacia y prudencia.

Como resultado de ese desmantelamiento se han creado verdaderas condiciones de inseguridad nacional, cuyas manifestaciones más obvias son el crecimiento del poder armado del narcotráfico (y por lo tanto el homicidio del cardinal Posadas Ocampo), la sublevación de Chiapas y el asesinato de Colosio, pero que se componen de las vivencias cotidianas de muchos ciudadanos, afectados en sus vidas y sus intereses por poderes acerca de los cuales el CISN tiene el deber de informar.

A cambio de esa riesgosa ineficacia, que puede poner en peligro la soberanía nacional misma, el aparato gubernamental de protección está estrenando una vistosa presencia, evidenciada alrededor de varios candidatos presidenciales, a despecho suyo en algunos casos. El problema de la seguridad no es asunto de guardaespaldas, que hasta pueden empeorar con su acción las circunstancias de un atentado, sino de información puntualmente conseguida y comprobada. Cercar a los protagonistas de la campaña presidencial no es el mejor modo de resguardarlos, al menos si la operación se realiza con miembros o antiguos integrantes de corporaciones que padecen justificada mala fama.

A pesar de tal cerco, las giras de los candidatos de la oposición prosperan. En ámbitos sociológicamente diversos a sus enclaves naturales, como emisiones priístas de televisión, la Unión Social de Empresarios Mexicanos y la Universidad de las Américas, Cuauhtémoc Cárdenas se desplaza con la claridad -y el éxito- que sólo sus tozudos enemigos se empecinan en negar. Y puesto que en otro ambiente estudiantil, el ITAM, Diego Fernández de Cevallos alcanza altas cuotas de aceptación, tal vez debamos esperar del voto joven la definición de un nuevo rumbo.

GRAN REMATE DE PRIMAVERA HASTA ABRIL 21 EN LA REGIÓN CON ESTE ANUNCIO

**SEDAS 100% SEDAS ITALIANAS APROVECHE**

Por única vez 250 diseños

**AHORA ES CUANDO**

Vístase de seda. Sólo que no quiera.

ASOMBRESE DE LOS PRECIOS Comuníquese a sus amigos

STEFANO, S.A. DE C.V. MONTERREY 416 COL. ROMA-MEXICO 6390458



Foto: REFORMA / Archivo

Al presentarse de nuevo en Chiapas, el comisionado para la paz en esa entidad, Manuel Camacho Solís, desmintió que aceptará una embajada (se había hablado de la de España), con lo que tal vez inquietará una vez más a los jefes del Partido Revolucionario Institucional.